# La Generalitat dejó desprotegidos los datos de cinco millones de catalanes

En su intento por sortear los bloqueos de la Guardia Civil encriptó el censo con unas claves que se pueden extraer con programas simples

:: MELCHOR SÁIZ-PARDO

**MADRID.** El Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la misma unidad que neutralizó en media hora el 1-O buena parte de la aplicación del censo universal y que horas antes había puesto contra las cuerdas a la Generalitat bloqueando todo su aparato tecnológico, lo avisó la misma mañana del domingo: el 'Govern' había dejado desprotegidos los datos de los más de cinco millones de electores catalanes. Ayer la misma denuncia la hizo la publicación Hacker News, una de las 'biblias' de la seguridad informática y los piratas tecnológicos.

La UCO avisó el domingo que los técnicos de la Generalitat, en su intento precipitado por evitar el acoso de los especialistas de la Guardia Civil, habían puesto en marcha infinidad de programas y aplicaciones, entre ellos, el del 'censo electoral', bajo la denominación de proyecto 'e-vot' (votación electrónica).

El problema es que todas esas aplicaciones estaban encriptadas de una forma muy débil, tal y como adelantó este periódico el mismo lunes, haciéndose eco de los avisos del instituto armado. Y ahora Hacker News ha revelado los errores cometidos por la Generalitat y que todavía –avisan los especialistas de la UCO– siguen exponiendo en internet los datos censales de todos los catalanes mayores de 18 años. El 'Govern' –relata la publicación y confirman los técnicos que combatieron las añagazas informáticas de la Generalitat– encriptó el censo con un protocolo llamado IPFS.

Se trata –explican desde la Guardia Civil– de una herramienta eficaz si se usa adecuadamente. El problema es que los técnicos de Carles Puigdemont, sabedores de que ese instrumento iba a tener que ser usado por muchas personas para evitar el cerco policial, usaron códigos bastante simples.

Y para más inri –y este dato los revela Hacker News– la Generalitat usó como algoritmo matemático de cifrado un número muy corto (de tan solo cuatro dígitos), el 1714. Rendir con esa cifra tan corta un homenaje al año icónico del independentismo catalán (fue ese año cuando las tropas borbónicas rindieron Barcelona en la guerra de sucesión) es lo que habría hecho que el censo en casi su totalidad esté al alcance de cualquier 'hacker' con conocimientos «medianos» de informática y con un ordenador «mediocre», en palabras de uno de los funcionarios del Ministerio del Interior que ha participado durante los últimos días en la operación para desactivar el 'e-vot'.

Una vez conocidos esos algoritmos y con un par de horas –insisten los investigadores– cualquier 'hacker' puede acceder a los últimos cinco dígitos del DNI, la letra del NIF, la fecha de nacimiento y el código postal de los votantes.

El acceso en sí no facilita el nombre del ciudadano, pero sí que abre una ventana de posibilidades inmensas (incluida la de llegar a su identidad) con el cruce de datos con otras bases más simples.

### Incógnita

El problema –explican desde la Guardia Civil– es aún mayor porque ni los expertos del instituto armado pueden precisar en cuántas webs volcaron el censo los técnicos de la Generalitat para intentar escapar del cerco tecnológico de las fuerzas de seguridad del Estado.

La única certeza que tiene la Guardia Civil es que los promotores del 1-O controlaron todo el proceso telemático del referéndum ilegal a través de una complicada maraña informática cuyo epicentro fue la web de la 'Casa de les Punxes', un museo modernista del centro de Barcelona.

Desde esa web, que los expertos aseguran que carecía de medidas de seguridad reforzada, los técnicos de la Generalitat abrieron varios puertos para que desde colegios se pudiera acceder a la base censal que estaba siendo enviada desde Departamento de Exteriores de la Generalitat que dirige Raül Romeva.

Especialistas de la Guardia Civil aseguraron ayer que las deficiencias detectadas por la publicación Hacker News no son las únicas que cometieron los técnicos de la Generalitat, aunque, por motivos de seguridad, se negaron a dar más datos sobre estas vulnerabilidades.

Efectivos policiales abandonando ayer el hotel Gaudí de Reus, en el que han sido hostigados durante días. :: JAUME SELLART/EFE

# Realojados centenares de agentes en Aragón y Valencia para evitar acosos

Huesca y Castellón serán la base del nuevo despliegue «provisional» y se podría extender hasta Zaragoza y Teruel

:: M. SÁIZ-PARDO

**MADRID.** Es una medida «provisional» e, insisten desde el Gobierno, de ningún modo es un repliegue de Cataluña. En el Ministerio del Interior hablan de una reorganización para alagar cuanto «haga falta» la «disponibilidad inmediata» de 12.000 funcionarios de las fuerzas de Seguridad del Estado en esa comunidad.

Pero lo cierto es que el acoso en decenas de poblaciones, las coacciones municipales a los hosteleros y el fin de buena parte de los contratos con los establecimientos entre ayer y el fin de semana han hecho que el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido haya puesto en marcha, no sin cierta improvisación, una suerte de plan de evacuación de los más de 5.500 agentes (los movilizados de bases de toda España) a lugares menos hostiles fuera de Cataluña, pero de fácil acceso a puntos estratégicos de aquella comunidad.

Desde el miércoles ha comenzado una gran operación de realojo de centenares de agentes –algunas fuentes hablan de miles– en las provincias limítrofes de Cataluña. El eje central de operativo, según adelantó el periódico Heraldo de Aragón y han confirmado fuentes de la seguridad del Estado, es la franja oriental de la provincia de Huesca. En localidades como de Fraga, Barbastro, Monzón o Binéfar se han colgado los carteles de completo en muchos establecimientos.

Pero no solo. El ministro Zoido ya informó la noche del miércoles a los representantes de la Policía y la Guardia Civil que también se están cerrando contratos en el norte de la provincia de Castellón. La operación de reubicación podría extenderse a puntos de Teruel y también de Zaragoza. A la capital aragonesa ya se han desplazado decenas de miembros de las Unidad de Prevención y Reacción de Madrid, que se vieron atrapados en los hostigamientos a los funcionarios que pernoctaban en dos hoteles de Pineda de Mar (Barcelona).

### 400 funcionarios

Ayer salieron de esos dos alojamientos los últimos agentes del contingente de hasta 400 efectivos que tenían sus bases en los dos hoteles que denunciaron, para luego desdecirse, que habían recibido coacciones del consistorio para echar a los policías. Desde Interior dejaron claro que la salida de estos funcionarios se ha debido al fin de los contratos.

Los agentes de Pineda son buena parte de los que ayer llegaron a Huesca y a otros lugares. También las decenas de efectivos que estaban alojados en el hotel Gaudí de Reus, y que han sufrido continuos escraches- están siendo reubicados en estos centros hosteleros de fuera de Cataluña. En total, Interior contrató para el operativo del día de la consulta 41hoteles y hostales en las cuatro provincias catalanas. La inmensa mayoría de estos establecimientos se han negado a prorrogar las reservas que están expirando estos días. Las últimas reservas garantizadas son para el 8 de octubre.

La operación de 'evacuación' de los agentes al este de Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana ha sido muy bien acogida por los funcionarios, que durante días se han visto obligados a permanecer prácticamente encerrados en los hoteles por el hostigamiento de los vecinos.

Pero este operativo no ha resulto, ni mucho menos, los problemas. Interior está preocupado por la situación de los más de 2.000 agentes de la Policía y la Guardia Civil que viven desde hace casi dos semanas en los tres ferris amarrados en los puertos de Barcelona y Tarragona. Tampoco es mejor el día a día de los centenares de funcionarios recluidos en los cuarteles del Ejército de Tierra de Barcelona y Gerona.